

Capítulo 31

Los países del Tercer Mundo en la década de 1980

La crisis financiera mundial de 1973 generó la deuda externa de los países menos desarrollados. Al convertirse la deuda en el principal problema del Tercer Mundo, se agravaron los otros problemas que repercutían en el desenvolvimiento de las naciones de ese conglomerado. Al terminar 1987, la deuda externa superaba el billón de dólares. México, Brasil, Venezuela, Argentina, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Nigeria, Chile y Yugoslavia encabezaban, en ese orden, la lista de las naciones más endeudadas.

La explicación al grave problema se encuentra, por una parte, en la actitud de los mismos deudores, cuyos gobiernos, sin ningún interés por contribuir a un verdadero desarrollo, se conformaron con destinar el apoyo financiero a programas irracionales e inflacionistas.

En América Latina era particularmente preocupante la situación. La moratoria a la que buscaron llegar los países deudores provocó que se cortaran créditos que estaban en proceso de negociación. Se acentuaron las medidas para renegociar las deudas de las naciones con situaciones más problemáticas, aunque la imposibilidad real de que se pagara la deuda forzaba a los acreedores a “conformarse” con recibir, al menos, el pago de intereses.

No obstante, en los últimos años de la década de 1980 se continuaba una política encaminada a renegociar nuevos plazos, consolidaciones y reconversiones, brindando considerables facilidades a los deudores, para evitar situaciones de quiebra absoluta. Un ejemplo importantísimo ocurrió en la decimocuarta cumbre de los “Siete Grandes” celebrada en Toronto, en junio de 1988, cuando se perdonó la deuda de las naciones africanas, la cual era superior a los 5 mil millones de dólares.

África

Sudáfrica

Ha sido uno de los países donde la colonización y el racismo llegaron a su máximo nivel. Los graves problemas de segregación racial se superaron a partir de la década de 1990.

Localizado en el sur de África y con una gran riqueza de recursos minerales y abundante mano de obra barata, grandes capitales provenientes de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Israel, Canadá y Alemania se dirigieron hacia el Estado sudafricano, monopolizando las actividades principales: agricultura, ganadería y, sobre todo, minería (extracción de oro, diamantes, petróleo, cobre, cromo), protegidos por su ventaja militar.

Durante muchas décadas, blancos y negros (bantúes) coexistieron en condiciones de desigualdad. El *apartheid*, palabra afrikaner que significa “separación”, fue la piedra angular de la estructura económica y social. Ese nombre fue dado por el gobierno de la República Sudafricana

a su sistema de segregación racial a partir de 1948, cuando se estableció como política oficial del Estado. Así, una minoría blanca (menos del 5 por ciento de la población) legisla sobre la forma de vida de la inmensa población de color y de origen asiático, cuyo trato era prácticamente esclavista. Todos los aspectos de la vida de los negros estaban reglamentados.

Se separan las razas en las escuelas, se establecen *ghetos* y zonas habitacionales especiales; se legisla en los empleos y se suprime la representación parlamentaria. Se establecen leyes especiales sobre el matrimonio y el registro de la población.

Se les segrega en los transportes; no pueden entrar a casas de los blancos sin autorización; no tienen representaciones obreras y están excluidos de asociaciones culturales. No pueden adquirir propiedades y tienen horarios especiales para el uso de bibliotecas, zoológicos, galerías de arte, museos y jardines públicos; en las zonas rurales mueren 228 niños por cada mil, un índice de mortalidad de los más altos del mundo. Por el más insignificante motivo se les arresta, detiene indefinidamente y mantiene incomunicados, o se les deporta o destierra a zonas lejanas.

Prácticamente los negros no tenían ningún derecho: el parlamento sudafricano estaba compuesto únicamente por blancos. No tenían derecho a voto y existía una terrible censura. Incluso los opositores blancos al *apartheid* también eran perseguidos y encarcelados. La ley de “delitos criminales” castigaba por protestar contra las normas del *apartheid* con multas, cárcel o azotes.

Cuando se impuso un nuevo sistema de control sobre la población a través de “pases” (libretas de referencias personal), que debían portarse obligatoriamente a partir de los 16 años de edad, el Congreso Panafricanista exigió su abolición y se dio un movimiento social que fue severamente reprimido abriendo fuego contra la población y encarcelando a los líderes.

Sudáfrica es la zona más industrializada del continente africano. El ingreso per cápita de los blancos era uno de los más altos del mundo; y el de los africanos negros, de los más bajos. La educación para los blancos era gratuita y obligatoria, aunque para los negros no.

Aprendían inglés y afrikaans (lengua neerlandesa hablada en África del Sur) para recibir órdenes. Sin embargo, la introducción del afrikaans generó una gran protesta entre la población, especialmente en Soweto, donde en 1976 los escolares negros protestaron y fueron violentamente reprimidos.

Durante muchos años, varios grupos sudafricanos buscaron ayuda en organizaciones internacionales para cambiar la situación. Su lucha no fue en vano y, finalmente, en junio de 1991, la política separatista del *apartheid*, símbolo mundial de la opresión racial, llegó a su fin. Después de sostener un sistema racista con base en un sinfín de matanzas de gente de color y constantes violaciones a los derechos humanos, el parlamento sudafricano derogó todas las leyes segregacionistas. Luego de 26 años de prisión por oponerse a la opresión racial, el máximo líder sudafricano Nelson Mandela salió en libertad. Desde entonces viajó a diversos países de Europa y América para ayudar a consolidar la democracia igualitaria en Sudáfrica. Logró su objetivo: en 1994 se convocaron elecciones. Ejerciendo su derecho al voto, los sudafricanos eligieron a Nelson Mandela como su presidente.

Asia

Medio Oriente

La lucha de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)

Pese al tratado de paz entre Israel y Egipto firmado en 1977, la tensión continuó en la zona. Los palestinos no participaron dentro de las negociaciones y, por lo tanto, la lucha por la recuperación de su territorio seguía en pie. Al inicio de la década de 1980, los palestinos, con

nacionalidad pero sin territorio, eran refugiados en Jordania, Siria y Líbano, desde donde constantemente atacaban los territorios bajo dominio israelí, creando problemas entre esas naciones e Israel. Ejemplo claro de ello fue la invasión israelí a Líbano el 5 de junio de 1982, realizada para dismantelar las bases palestinas que se concentraban en dicho territorio, además de que la dirigencia de la OLP se movía en Beirut, capital libanesa. Estados Unidos apoyaba a Israel para mantener la hegemonía estratégica en la zona. Sin embargo, finalmente Israel se vio forzado a salir de Líbano en 1985.

La OLP se consolidaba a nivel internacional gracias a la fuerza que irradiaba su resistencia. En 1987 comenzó la “intifada” o levantamiento diario de oposición, que los grupos de palestinos organizaron en los territorios ocupados por Israel.

La lucha continuó hasta el 13 de septiembre de 1993, cuando Yasser Arafat, líder de la OLP, y Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, firmaron el acuerdo con el cual se concedía la autonomía a Gaza y Jericó, así como la autodeterminación de los palestinos en los territorios ocupados por israelitas desde 1967. Dos años más tarde se sentaron las bases para crear un Estado palestino; sin embargo, ello no fue posible, pues comunidades israelíes y árabes mostraban descontento por dicho acuerdo. Se acusaba a Rabin de terminar con el ideal del gran Estado de Israel, y a Arafat, de ser un traidor a la resistencia palestina. En los primeros años del siglo XXI la situación empeoró y aún no se vislumbra la paz en esa conflictiva zona.

El conflicto Irán-Irak

En la década de 1970 Irán, al igual que Israel, era salvaguarda de la hegemonía estadounidense en Medio Oriente y, más concretamente, en la zona petrolera. Durante el gobierno de Muhammad Reza Pahlevi se nacionalizó gran parte del petróleo, sector clave de la economía, con la finalidad de estimular el desarrollo industrial siderúrgico, textil y nuclear, a la vez que se fortalecía sin medida el aparato estatal.

Los intentos por consolidar una burguesía agraria e industrial pro occidental generaron corrupción y desigualdad social. Éstos, junto con otros factores, provocaron una insurrección generalizada de los iraníes el 28 de septiembre de 1978, con manifestaciones y huelgas, alentadas por el líder religioso chiíta Ruhollah Jomeini.

Se protestaba por el fracaso de los modelos occidentales de modernización, pero, sobre todo, por la pérdida de identidad cultural y la confusión moral que aquél había causado. Se buscaba volver a los principios establecidos por el Islam, a través del *Corán*, para guiar el desarrollo de la nación.

La fuerza del movimiento insurrecto orilló a Reza Pahlevi a abandonar el país en enero de 1979, fecha en la que se promulgó la nueva República Islámica de Irán, cuyo dirigente sería el ayatollah Jomeini. El equilibrio geopolítico económico de la zona estaba en peligro. La revolución iraní y los acuerdos de Campo David (Estados Unidos), que aislaron a Egipto del mundo árabe, fueron los motivos para que Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, tratase de unificarse con Siria para retomar el liderazgo en la región.

Entonces, se revivieron las disputas limítrofes entre Irán e Irak. Con los acuerdos de Argel, firmados en 1975, Bagdad perdía parte de su salida al Golfo, a cambio de interrumpir la ayuda iraní a la rebelión kurda, la cual pretendía alcanzar el reconocimiento de su territorio dividido entre Turquía, Irak, Irán y Siria. El momento para recuperarla parecía ser 1979.

La guerra que inició Irak contra Irán en 1980, con la finalidad antes mencionada, aparentemente buscaba acabar con la revolución iraní, pretextando lo peligroso que era el mensaje fundamentalista para los gobiernos de la zona.

Arabia Saudita, Kuwait y otros países petroleros temían la expansión del mensaje chiíta, que sólo reconocía como gobernantes legítimos a los descendientes de Alí (yerno de Mahoma), y la posible ola de levantamientos populares, por lo que apoyaron la caída del régimen de Jomeini, hasta el grado de financiar a Irak para el logro de ese objetivo. No les importaba correr el riesgo de que Hussein se consolidara como el nuevo líder regional.

En 1980, el ejército iraquí penetró en territorio iraní sin éxito, ya que tuvo que replegarse y continuar la guerra desde su propio suelo.

En 1984 el conflicto no parecía inclinarse favorablemente para ningún lado, sólo se vivía un profundo desgaste en ambos contendientes. Los intereses petroleros en el Golfo Pérsico hicieron temer la extensión del conflicto a otras naciones, por lo que se buscó un cese al fuego que se firmó en 1988.

América Latina

En la década de 1980, uno de los acontecimientos que más destacaron en la mayoría de los países latinoamericanos fue el estallido de una profunda crisis económica, que se reflejó en el incremento de la deuda externa, lo cual la dejó fuera de control.

El modelo que otorgaba un papel central al Estado fue de gran influencia para las transformaciones políticas y económicas de las décadas anteriores. En el orden político, la existencia de un Estado fuerte y con cierta autonomía formalizaba la representación de intereses a través de sectores que se adherían a grupos institucionalizados, que se acercaban más a una participación real que a la simple representación. En el orden económico, se crearon mecanismos de regulación, nacionalizaciones o inversiones directas en empresas estatales, aun cuando la inserción a una economía internacional se basara fundamentalmente en productos primarios poco elaborados, a la vez que se dependía de la tecnología extranjera. Sin embargo, los gobiernos tenían poco interés, o baja capacidad en la política fiscal, para lograr una extracción de recursos que apoyara sus proyectos económicos. Esta debilidad política motivó el incremento de la deuda externa, lo cual obligó a los gobiernos, por un lado, a canalizar cada vez más recursos al pago de los compromisos con los organismos financieros internacionales y, por otro, a no poder aumentar el gasto social con la consecuente caída del nivel de vida de la mayoría de la población.

Algunos indicadores, como los que menciona Norman Hicks en la publicación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), *Desarrollo social y programa de ajuste*, revelan que al finalizar la década de 1980, la llamada “década perdida”, América Latina pagó por el servicio de su deuda más del 4 por ciento del producto interno bruto, cuando entre 1985 y 1989 el crecimiento fue de 1.5 por ciento. Para 1992, por concepto de intereses y utilidades pagó aproximadamente 30 mil millones de dólares, al tiempo que su deuda ascendía a 450 mil 875 millones de dólares ese mismo año.

En 1995, Salvador Arriola, secretario permanente del SELA, señaló que la deuda externa latinoamericana superaba los 530 mil millones de dólares (cifra que duplica los niveles de 1982, cuando estalló la crisis deudora), provocando una transferencia neta de recursos al exterior mayor a los 35 mil millones de dólares. La salida de capital aumentó los índices de pobreza.

El Banco Mundial declaraba: “A principios de 1993, el 20 por ciento más pobre de la población de América Latina recibía apenas 4 por ciento del total del producto interno bruto (PIB), y el porcentaje de personas que vivía en situación de pobreza aumentó de 27 por ciento a 32 por ciento del total de la población, en el periodo 1980-1989”.

A ello se agregaba la caída de los salarios mínimos y medios en la mayoría de las naciones latinoamericanas, que se encontraba entre 50 y 70 por ciento para los casos de México, Perú, Brasil y Venezuela en el periodo 1980-1990.

La dificultad de soportar la deuda externa, aunada a diversos factores domésticos, como la pérdida de eficacia y de legitimidad, desembocaron en la caída de los regímenes autoritarios. Los excesos de los cuerpos represivos generaron una revaloración de la democracia, como un concepto distintivo y antagónico de la experiencia política anterior. Sin embargo, en la práctica política, debido al interés por reinstaurar el sistema democrático en los países de América Latina, se planteó el problema adicional de distinguir entre lo que se suponía un mero cambio de régimen político y la efectiva democratización de las instituciones estatales, de los procedimientos competitivos y de los mecanismos participativos.

La crisis política y económica afectó a los gobiernos latinoamericanos, pues las contradicciones alcanzaron tal nivel que ya no se pudo gobernar. El consumo de las clases medias y las políticas de bienestar social no sólo se frenaron, sino que se abatieron. Además, los capitales

mediano y pequeño, el público y el social no sólo fueron integrados o privatizados, sino que se les obligó a contribuir a la concentración especulativa del gran capital. Países y pueblos enteros realizaron grandes transferencias de excedentes, que cubrían los déficit fiscales y armamentistas de las metrópolis, e incrementaron las tasas de acumulación de los grandes negocios. Como la reacción popular a esta política no sólo se limitaba a los grupos más explotados, sino que incluía a los sectores medios y a los obreros organizados, la pérdida de los mediadores, la radicalización y la agresividad crecientes, ligados a la desesperación de los habitantes marginados urbanos, de los campesinos pobres, de las minorías indígenas, de los estudiantes e intelectuales, representaban una amenaza revolucionaria que los gobernantes de nuevo estilo enfrentaron mediante una preparación ideológica y militar rigurosamente programada.

Estados Unidos generó mecanismos de control que posibilitaron una continuidad de su hegemonía, tal como la “guerra de baja intensidad” (GBI), diseñada para satisfacer a la opinión pública estadounidense y que se aplicó en forma sistemática en América Central. Era una guerra no declarada y sin riesgos para los jóvenes norteamericanos, aunque sí para las poblaciones nativas que sufrieron los ataques. Se procuraba que no hubiera enfrentamientos directos prolongados de las fuerzas regulares estadounidenses, y que los conflictos de larga duración estuvieran a cargo de los nativos. Las fuerzas regulares de Estados Unidos sólo intervendrían y actuarían cuando fuera oportuno, en forma rápida —con radares, aviones, naves— y siempre que las tropas domésticas hubieran sentado las bases del triunfo.

Al terminar la década de 1980 las transformaciones operadas en el contexto internacional (el derrumbe del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética) trajeron una nueva estrategia diplomática hacia América Latina: el 27 de junio de 1990 el presidente estadounidense George Bush lanzó la “Iniciativa de las Américas”, con la participación de muchos países latinoamericanos. Con ella se determinaba el final de la etapa militarista y el inicio de una nueva fase democrática, de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción en todas las naciones del continente americano. Pese a las buenas intenciones, la realidad latinoamericana empezaría a chocar con tal iniciativa.

La guerra de baja intensidad. La lucha del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador

Como Nicaragua, El Salvador mantuvo una trayectoria histórico-política de lucha nacional y de resistencia antiimperialista. Tal carácter lo representó Farabundo Martí, fundador del Partido Comunista en 1925, quien luchó junto a Augusto Sandino en su resistencia contra la presencia norteamericana en Nicaragua y posteriormente en su país, donde fue encarcelado y fusilado.

Entre 1932 Y 1944 el general Maximiliano Hernández Martínez mantuvo una férrea dictadura. El 90 por ciento de la riqueza estaba en manos del 0.5 por ciento de la población; no había expectativas de democracia. Durante las décadas de 1960 y 1970 los monopolios se incrementaron. Se producía casi exclusivamente para el exterior y se agudizaba la explotación obrera. Los movimientos populares se organizaron contra la explotación masiva, la dependencia económica, el mal uso de los recursos nacionales, la represión, el fraude electoral, la corrupción y la arbitrariedad institucionalizada. Las tensiones sociales se acumulaban por el aumento del desempleo y el hambre, la escasa atención médica y la casi inexistente educación. Los cambios debían ser políticos y sociales para destruir al régimen opresivo.

El engaño en los procesos electorales generó manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas con las armas. Campesinos y obreros eran desaparecidos, en tanto que se torturaba y asesinaba para buscar la “pacificación”. Las huelgas populares se multiplicaban. La Universidad era ocupada por el ejército y se cerraba. La situación en el campo empeoraba. Se perseguía a la Iglesia progresista. Entonces empezaron a surgir diferentes movimientos y fuerzas revolucionarias. La lucha guerrillera se hizo presente a través del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El 28 de febrero de 1979 el pueblo se concentró en la Plaza de la Libertad para protestar por las elecciones fraudulentas. El gobierno respondió con una masacre. Se prohibieron los

actos organizados a la vez que crecía la represión. En octubre se llevó a cabo un golpe contra Carlos Humberto Romero, quien ocupaba la presidencia desde 1977. Se reanudaron las luchas por el poder entre el Estado y los revolucionarios. Los ataques militares contra los salvadoreños eran cada vez más brutales. La Universidad fue allanada nuevamente con tanques, morteros y cañones; quemaron la biblioteca y, con ella, documentos valiosos. Diversos organismos internacionales condenaron la violación de los derechos humanos en El Salvador, en tanto que la Iglesia, encabezada por el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, se comprometía abiertamente con el pueblo y con los inminentes cambios sociales. Por su parte, Estados Unidos apoyaba militar, política y económicamente al régimen.

El arzobispo Romero trató de levantar el ánimo y de suavizar el proceso político, oponiéndose a la violencia, a la intromisión norteamericana y a la barbarie del ejército; en un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias históricas, la Iglesia se sentía amenazada por la oligarquía, el imperialismo y el descrédito de las masas populares. Romero estaba de acuerdo con la organización popular, porque la consideraba como la base para la dignidad humana. Se daba cuenta de la inutilidad de diálogo con el gobierno. Alertaba a los salvadoreños de un presupuesto de 20 millones de dólares, provenientes de Estados Unidos, para entrenar terroristas en tortura y guerra psicológica, para la construcción de pistas secretas y para sostener a las fuerzas armadas; además sabía de la existencia de una lista negra de 24 mil personas que el gobierno deseaba eliminar, tanto en territorio salvadoreño como en el exterior. Romero pedía el cese de la represión y fue asesinado el 24 de marzo de 1980, al oficiar una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia. El 30 de marzo, durante su sepelio, se reunió una inmensa multitud que reafirmó su decisión de luchar contra el gobierno. Los francotiradores actuaron; la multitud pretendía refugiarse en la catedral; luego, los cadáveres y heridos se amontonaban.

El pueblo aprendió la estrategia revolucionaria y siguió su lucha a pesar de la represión militar; de sus errores y aciertos aprendió el arte de la insurrección.

En la década de 1980 el FMLN tomó fuerza. El gobierno trató de establecer el diálogo y las negociaciones mientras la represión continuaba. En noviembre de 1987, la guerrilla desencadenó una fuerte ofensiva sobre la capital salvadoreña y los principales departamentos del país, que hizo tambalear el poder de las fuerzas armadas y del gobierno de Alfredo Cristiani.

En 1990 se reanudó el diálogo de paz con temas de negociación como el futuro de las fuerzas armadas, los derechos humanos, los sistemas judicial y electoral, las reformas a la constitución, los problemas económicos y sociales, que fueron verificados por la ONU.

En enero de 1992, en el alcázar del Castillo de Chapultepec en la ciudad de México, se firmaron los acuerdos de paz, abriéndose así el proceso de reconciliación sobre la base de una nueva relación basada en la dignidad, la cooperación y la vida más conveniente para el pueblo salvadoreño.



Lecturas sugeridas

CORREA VILLALOBOS, Francisco, "El apartheid", en *Foro Internacional*, núm. 19, vol. v.

BOLAÑOS, Federico, "América Latina en deuda: Costos sociales y poder transnacional", en *Cuadernos americanos*, núm. 30, año v, vol. 6, nov.-dic. de 1991, pp. 65-86.

Lee historia

Deportados hacia el infierno

Hazael Toledano



La deportación de más de 415 integristas islámicos de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, algo que hubiese pasado casi inadvertido de ocurrir en un país árabe, ha supuesto un enorme costo político para el primer ministro israelí Isaac Rabin. Sin embargo, en contra de lo previsto, no ha destruido el proceso de paz en el Oriente Próximo. El líder del Partido Laborista israelí, desde hace seis meses en el poder, ha perdido su buena imagen internacional: como con la política de su antecesor, el inflexible ex primer ministro Isaac Shamir, Israel se ha convertido en el perverso ogro antipalestino.

Después de salvar las conversaciones de paz del abismo con sólo anunciar la fórmula mágica —estar dispuesto a ceder parte de los territorios ocupados para lograr la paz— la deportación ha dejado dividida a la coalición de gobierno. El país está bajo la espada de Damocles: la de unas posibles sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU —un sueño para las capitales árabes— si se sigue negando al retorno de los palestinos, según se aprobó en la resolución 799.

Además de rechazar de plano esa resolución, el primer ministro —líder del ala dura del laborismo— también se opuso a que la Cruz Roja utilizara la “zona de seguridad” que Israel controla en el sur del Líbano para llevar un convoy con medicinas y alimentos a los deportados. Éstos, con la nieve hasta los tobillos, quedaron entre dos fuegos. Cercados en su helado campamento a mil metros sobre el nivel del mar por el ejército libanés, que no los dejaba avanzar, y el israelí, que nos les permitía retornar, los desterrados, entre los cuales hay decenas de profesionales universitarios, se han convertido en símbolo de los parias del mundo.

En estos días, los mejores amigos de Rabin son sus adversarios de la derecha nacionalista porque está enfrentado a sus socios de gobierno más progre-

sitas, a muchos miembros de su partido y a la minoría árabe del país, que había visto en él al líder capaz de poner fin al sufrimiento de sus hermanos palestinos en Cisjordania y Gaza.

La Comunidad Europea ha paralizado las negociaciones en las que estaban empeñados Rabin y su ministro de Asuntos Exteriores, Simon Peres, para integrar a Israel en el espacio económico. El proceso de paz, que comenzó en noviembre de 1991 con la Conferencia de Madrid para Oriente Próximo (desde diciembre de ese año se celebra en Washington), parecía haber quedado contra las cuerdas, pero no ha sido así: nada por ahora, ni siquiera la deportación de los 415 palestinos a Líbano, podrá dejar fuera de combate las conversaciones de paz. Sin embargo, el destierro de los activistas del Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamas) y de la Yihad Islámica —con el que Rabin obtuvo el respaldo del 91 por ciento de los israelíes— sí podría provocar el abandono de algunos miembros de la delegación palestina de la mesa de negociaciones.

“Perdimos el mandato que teníamos para conversar de paz con Israel —declaró Ghasan Al-Jatib, delegado en las negociaciones—. La deportación ha quebrado el delicado equilibrio entre la mayoría de los palestinos, que las apoyan, y la minoría que se opone a ella”. Hamas, al que pertenece el grueso de los desterrados, “aunque siempre se ha opuesto, hasta ahora veía nuestra participación en las conversaciones con Israel como una decisión de la mayoría del pueblo palestino”, agregó. Sin embargo, la sangre no llegará al río y el diálogo va a continuar.

Toledano, Hazael,
Cambio 16, núm. 1,103,
 11 de enero de 1993, pp. 32-35.

Lee historia

Ajuste y democracia en América Latina

Lucrecia Lozano



La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha acuñado el término “década perdida” para definir, comparativamente con las tasas de crecimiento, ingreso, comercio y otros indicadores, registrados por los países caribeños y latinoamericanos en el periodo 1960-1980, y en relación con el comportamiento de las economías de los países industrializados organizados en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los retrocesos socioeconómicos observados por la región durante esos años.

Las causas de la crisis económica —denominada por la CEPAL “crisis de la deuda externa”— son múltiples y responden tanto a condicionamientos externos como a factores internos y de carácter estructural.

En lo tocante al ámbito internacional, es preciso señalar que la recesión que afectó a las economías industrializadas a principios de los 80 repercutió severamente en las naciones en vías de desarrollo a partir de 1982. El movimiento recesivo, así como la paulatina recuperación de las economías centrales desde 1983, empataron, además, con el proceso de reordenamiento de la economía mundial, que con base en la revolución científico-tecnológica y la reestructuración productiva derivada de ésta, ha tenido lugar a nivel global en los últimos años y ha conducido a afirmar la supremacía de las industrias de alta tecnología —“científicamente avanzadas”— en la producción.

El paradigma económico que la llamada Tercera Revolución Industrial viene desarrollando en su seno plantea drásticos cambios en el proceso productivo: desde la configuración de nuevas formas de organización de la producción y el despliegue de novedosos y originales procesos —como la robotización y la automatización, o el surgimiento de especies nuevas vinculadas a los avances de la ingeniería genética y la biotecnología, etcétera—, hasta el desarrollo y uso de

nuevos insumos —productos básicos— en la elaboración de modernos diseños industriales y la sustitución creciente de la producción intensiva en mano de obra y materiales por la producción intensiva en conocimiento “inteligencia adiestrada”.

La reorganización productiva está a su vez articulando una nueva división internacional del trabajo, acorde con los requerimientos planteados con la producción y circulación de los bienes y servicios generados en las economías industrializadas sobre la base de la modernización y la innovación tecnológicas. Las hoy en día llamadas “industrias de punta”, entre las que destacan la microelectrónica, la biotecnología y la producción de nuevos materiales, son objeto de la más amplia investigación y difusión en los países avanzados, en tanto que en los países en vías de desarrollo enfrentan el desafío que estas modificaciones productivas y tecnológicas plantean en sus procesos internos de acumulación y reproducción.

En el contexto de estos acelerados cambios, las economías de América Latina y el Caribe han experimentado en los últimos años una pérdida significativa de competitividad productiva a nivel internacional, así como la desvalorización relativa de sus exportaciones tradicionales —productos agrícolas y materias primas— frente al desarrollo de los nuevos materiales e insumos. A los procesos anteriores hay que agregar, además, el efecto que en la estructura productiva regional han tenido los procesos de descapitalización y desindustrialización operados en la última década a causa de la crisis y la recesión.

Lozano, Lucrecia, “Ajuste y democracia en América Latina”, *Cuadernos americanos*, núm. 30, año V, vol. 6, nov.-dic. de 1991.

- [illegible]

-
- This image shows a single page from a notebook or ledger. It features ten evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing. The margins are consistent on all sides, and there are no other markings, text, or illustrations present.

